

Revista nº1, Abril 2013

Foro

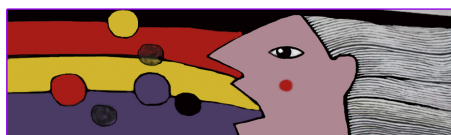
POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

de Sanlúcar de Barrameda



“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”

José Saramago



© Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda

Diseño: Carmen Álvarez Marín
Maquetación: Mercedes Fernández García

Depósito Legal: CA-195-2013

Esta edición cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía





PRÓLOGO

Es para mí un honor hacer este breve preámbulo al primer número de la revista del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, que tras meses de trabajo, hoy por fin ve la luz.

Uno de los objetivos que nos marcamos en los estatutos fundacionales de este Foro era la publicación de una revista que contribuyera al debate sobre la memoria democrática en esta ciudad, porque creemos que la memoria histórica forma parte de los pilares en los que se sustenta una sociedad, no sólo la sanluqueña, sino la de todo el país. Nuestra democracia no será tal, si no investigamos su pasado o miramos hacia otro lado, si no conocemos la verdad de lo que ocurrió durante el franquismo y la transición. Están equivocados quienes piensan que queremos abrir viejas heridas, cuando lo que realmente queremos es cerrarlas definitivamente. Porque para conocer lo que pasa en el presente y encaminarnos hacia el futuro no podemos permitir pasar de puntillas esquivando el pasado o dejando que se cierre en falso.

Con esta revista queremos hacer un homenaje a las personas que sufrieron por sus ideas y sobre todo a sus familias, conocer su historia y en definitiva rescatar la memoria pasada para dar dignidad, aunque de ésta estaban sobrados, a los asesinados, a los represaliados, a los exiliados, a los olvidados, a los silenciados por la dictadura franquista.

Las personas de mi generación crecimos en la España negra del terror implantado por la dictadura, terror que sufrí en mis propias carnes, pagando con cárcel el hecho de reclamar derechos sociales y laborales para los jornaleros de la viña en el año 1969, pero que como dijo Marcelino Camacho, ni me domaron, ni me doblegaron ni me domesticaron, conservando la decencia y la dignidad para seguir luchando por esta causa, porque me considero heredero de aquellos que entregaron su vida por defender la legalidad de la II República y que constituyeron una generación irrepetible en la historia de España.

El contenido de esta revista ha sido realizado gracias a la labor de socios y amigos del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, como son: Manuel Ruiz Romero, Domingo López, Manuel Toribio García, José Luis



Gutiérrez Molina, Mercedes Rodríguez, Pedro Pablo Santamaría, José Antonio Viejo Fernández, Juan Antonio Gallardo, José García Cabrera, Fernando Romero Romero, Ifigenia Bueno Bordell y Santiago Moreno Tello.

Nuestro agradecimiento también a Carmen Álvarez Marín y a Mercedes Fernández García por su incondicional ayuda en la maquetación de esta revista, a todos los socios y amigos comprometidos con los fines de este Foro y como no, a la Dirección General de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, porque sin la subvención económica concedida a esta Asociación, no hubiera sido posible la edición de la misma.

Por la verdad, la justicia y la reparación.

Eduardo Sánchez Fernández
Presidente del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)



Emotivo homenaje a los represaliados del franquismo

Los 57 funcionarios municipales que fueron objeto de represalias y depuración, por el régimen de Franco además de los 12 que fueron fusilados tras el golpe de Estado militar que trajo consigo la Guerra Civil en 1936 tienen desde hoy un azulejo conmemorativo que proclama sus nombres en el recuerdo y la memoria de los sanluqueños.

Los que perdieron la vida no tienen reparación posible. Pero los que perdieron su puesto de trabajo con motivo de sus ideas o por simple venganza personal de quienes fueron sus verdugos, al menos tendrán el consuelo de ver sus nombres inmortalizados en el mismo lugar donde trabajaron. Algunos de sus familiares y descendientes se han dado cita en el lugar, hoy Biblioteca Municipal, para rendir este homenaje a las víctimas de la dictadura militar, promovido por el Con la presentación de Ifigenia Bueno, y la asistencia de los directores generales de Administración Local y de la Memoria Democrática, Antonio Maíllo y Luis Naranjo, respectivamente, así como por miembros de la Corporación Municipal, se ha descubierto esta cerámica cuyo valor simbólico es muy alto, teniendo en cuenta el olvido en el que estos trabajadores municipales cayeron después de tantos años de represión. El cantautor Luis de Manuela puso la música a un acto en el que las palabras exaltaron el valor de la historia y la justicia como principal base del progreso y la evolución humanas.



Mucha nostalgia y el gran recuerdo a aquellas víctimas de la intolerancia embargaron los sentimientos de los asistentes. Un acto de un gran contenido que era necesario e imprescindible y que esperemos que se repita incluyendo a otras más personas que cayeron bajo las pistolas del odio y la sinrazón.



Los Romero Pazos: una familia de luchadores

Ifigenia Bueno Bordell

En el mes de diciembre, Virginia Pérez y yo, como miembros del Foro de la Memoria Democrática de Sanlúcar de Bda., entrevistamos a las hermanas Ana y Dolores Romero Pazos, dos mujeres encantadoras con una buena memoria. Durante la conversación los temas y personas se van ordenando y sucediendo.



Ana al ser mayor que Dolores tiene más recuerdos y así entre una y otra, en un ir peregrinando por la memoria vamos recuperando poco a poco datos que tenían medio olvidados. A veces pierden el hilo, hacen flashforward, porque los recuerdos no permanecen nítidos en su consciencia, son retazos imprecisos, perdidos en la mente, pero que a medida que vamos adentrándonos en la conversación van aflorando las reminiscencias de esta familia sanluqueña, símbolo de la lucha por la libertad, que son los Romero Pazos.

Manuel Romero Solicofre, el patriarca de los Romero Pazos, nacido en 1904 se casó en los años veinte con Ana Pazos Ruiz y van a ser padres de una extensa prole de nueve hijos: Manolo, Pepe, Antonio, Francisco, Ana, Juan, Dolores, Miguel y Pepi, de los cuales ya han muerto cuatro de ellos, Manolo, Antonio, Pepe y Miguel.

Manuel Romero Solicofre participaba de las ideas anarquistas y del naturismo libertario. Esta vinculación fue bastante importante a finales de la década de los años veinte durante la Dictadura de Primo de Rivera. Pertenecía a un Centro que se llamaba “La Sociedad” y que estaba situado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en la calle Luis de Eguilaz. Él vivía el anarquismo como una creencia de vida en coherencia con la naturaleza, que coexistía con la defensa de la revolución social para desembocar en un “comunismo libertario naturista”.

Y es esta fe ciega en el naturismo libertario, lo que le hace buscar la vida en una comuna como forma de convivencia social; y esta comuna la va a encontrar en Villanueva del Ariscal, un pueblecito del Aljarafe muy cerca de Sevilla. Allí se traslada con su mujer y alguno de sus hijos ya nacidos en el matrimonio. En la comuna el grupo de personas que compartían



voluntariamente la vida, intentan establecer asambleas permanentes para mantener los valores utópicos, como el de la sociedad ideal, que sólo es posible viviendo y trabajando de forma conjunta. Así era la filosofía de vida de Manuel, practicante del naturalismo libertario: dieta vegetariana, libre cultura (cultura del cuerpo libre, no sólo de la desnudez física, sino también de la desnudez moral) del amor libre, del higienismo, y de una ética frente a la



moral católica. Cuando Ana y Dolores nos narran este episodio, nos lo cuentan como una aventura corta, en la que su padre embarca a su madre, la cual no se siente a gusto en una comuna donde no hay mujeres, y los hombres van desnudos y según ellas están poco tiempo, pero cual nuestra sorpresa, cuando poco tiempo, van a ser dos años los que permanecen allí. Por más que he investigado sobre esta comuna, nadie me ha podido informar sobre su existencia.

Con esta forma de vida educó a sus hijos y la practicó hasta el final de su vida. Él fue quien les enseñó a leer y a escribir y a tener como máxima que tenían que vivir como su conciencia mandara. Cuentan, que antes de ir al trabajo, decía a su mujer lo que tenía que dar de comer a cada hijo. En casa se hacía dieta vegetariana, únicamente se comía carne dos veces al año, para celebrar los santos de los padres, el 1 de enero, el de Manuel y el 26 de julio el de Ana.

Como ateo que era, se negó a bautizar a sus hijos, y a inscribirlos en el registro civil, pero como siempre hay un alma salvadora, un familiar los bautizaba a sus espaldas, sin que él tuviera conocimiento. También se negó a inscribirlos en el Registro Civil. La inscripción también la hizo otro familiar después de la Guerra Civil, ante la amenaza de la ley de que se represaliaría a quien no lo hiciera. Fue un tío, según dice Ana, un poco achispado por el vino quien los fue a registrar, también sin el permiso del padre, pero en el estado en que estaba ni se acordaba en la fecha en la que habían nacido. Así aparecía cada uno en un orden distinto, el segundo era el primero, el primero el cuarto etc.

Esta circunstancia les acarreó problemas posteriormente: Pepe fue antes a la mili que Manuel, a Ana no la dejaban casar porque según el registro era menor de edad, cuando en realidad tenía 26 años, a otro hermano no le daban la ración por lo mismo, por ser menor de edad. Tuvieron serios problemas para arreglar este asunto, para lo cual tuvieron que contratar abogados que solucionaran este lío de los nacimientos.



Ana y Dolores van adentrándose en los recuerdos de la Guerra Civil; y es Ana, la que, a pesar de que sólo contaba cinco años cuando estalló, tiene los recuerdos más vivos. Recuerda como los vecinos cerraban sus puertas a cal y canto y otros huían al campo. Esto último es lo que hizo su padre que cogió a siete de sus hijos, los montó en un borrico y con su mujer abandonó su vivienda en la calle Parra y campo a través se fueron a una casa situada en zona conocida como La Maína, cerca de la carretera de Trebujena. Cuando llegaron, se encontraron que medio Sanlúcar se había ido a refugiar allí. Pasaron la noche como pudieron y al día siguiente, de la misma manera y rodeando, se fueron a la choza de un primo que vivía en la Reyerta, donde vivieron unos dos años. Hoy en día sería impensable esa solidaridad y ese compartir la nada que tuvieron aquella gente.

Continúa la historia por los primeros días de la Guerra. En un primer momento algunos valientes sanluqueños, entre los que se encontraba su hermano Manolo, que tenía 12 años, levantaron una barricada en la Cuesta del Ganado, desde donde disparaban lo que hizo retroceder a los sublevados hacia Jerez. Al día siguiente comenzó la entrada del ejército de Regulares de Franco. El pueblo de Sanlúcar deficientemente armado se dispuso a defender la República, el gobierno legal de España.

Desde la azotea de la casa nº 26 de la Cuesta del Ganado un grupo de personas disparaban contra el ejército moro; cuando éstos logran vencer la pequeña resistencia, entran a saco, pero se confunden de casa y entran en la nº 27, donde vivía una familia de Chipiona que hacía algunos años se habían venido a vivir a Sanlúcar. El mayor Juan Crespo Mellado de 72 años fue ejecutado debajo de la camilla, donde se había ocultado, hasta exterminar a toda la familia, hijos y nietos y a los vecinos que acudieron a auxiliarlos. Así, sin piedad, cayeron el primer día en esa casa, 18 personas. Esa casa no se pudo vender nunca porque nadie quería comprarla después de lo que sucedió allí.

Cuentan, como un día su padre regresó a la choza descompuesto por lo que acaba de ver en una cuneta: Al alcalde, Bienvenido Chamorro y un grupo de personas asesinadas amontonados, expuestos para que la gente los viera. Su padre se salvó de morir, gracias a Paco, un primo de su madre, que tenía influencias con los vencedores, y cuando fue detenido por un grupo de falangistas, Paco, aseguró que era del bando nacional, que era capataz y un buen hombre que no había hecho nada. De esta manera se salvó de una muerte segura.

Tanto Ana como Dolores, van haciendo un recorrido por la vida de aquellos años de hambre y lucha por la supervivencia. Nos hablan de los años de hambruna del 40 al 45, en los que muchos sanluqueños murieron literalmente de hambre, de la falta de ropa y calzado, del pan de maíz, de los fielatos, del estraperlo, de la censura en las cartas etc. Como anécdota nos relatan la historia del barco que naufragó frente a la costa de Sanlúcar en aquellos años.



La playa se llenó de gente recogiendo latas de conservas de todo tipo, sacos de harina, sacos de legumbres, mantas, del barco salía de todo, dicen. La Guardia Civil disparando para dispersar a la gente, pero no hubo forma, el hambre era más grande que el miedo a los tiros.

Después de contar estos episodio, se centran en la vida y lucha que llevó a cabo su hermano Manolo Romero Pazos, historia que he completado con algunos datos aportados por su nieta M^a Dolores Morales, su hija Dolores Romero y su compañero de lucha Eduardo Sánchez, presidente del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda.

Manuel Romero Pazos, nació en el año 1924 y murió en 1998, fue un destacado sindicalista que movilizó en los tiempos de la dictadura a los jornaleros de la viña, no sólo de Sanlúcar, sino del Marco de Jerez en general en su lucha por defender los derechos sociales y laborales de los mismos.



Para hablar de esta lucha, tenemos que remontarnos a la huelga de la poda en diciembre del año 1969, que se denominó la huelga de las 300 ptas. Fue seguida por unos 7000 jornaleros. Es la iniciación de una de las luchas obreras más importantes de esta zona en la segunda mitad de siglo XX y en plena dictadura franquista, lo que provocó por parte de ésta una represión brutal, que acabó con la detención de más de 50 jornaleros.

En las reivindicaciones, pedían un salario de 300 ptas. diarias y que la patronal pagara el transporte de los jornaleros hasta los campos. Por supuesto que la patronal se negó a la subida, alegando que había un convenio firmado. Duró la huelga casi dos meses. Hubo un acuerdo al final, se pasó de un jornal de 234,85 ptas. a 284,85 ptas, una subida de 50 ptas. y un incremento de un 10% en las faenas especiales, así como el pago del kilometraje que quedó fijado en 3 ptas. los cinco primeros kilómetros y 2,50 en el resto, hasta un máximo de 30 ptas. diarias.

El escarmiento por parte de la Brigada Político Social de Madrid con los jornaleros fue brutal. Comenzaron las detenciones a finales del mes de enero de 1970: Veintitantos en El Puerto, once en Jerez, 5 en Trebujena y en Sanlúcar, que fue el epicentro de la huelga, detuvieron a siete: Manuel Romero Pozos, Eduardo Sánchez Fernández, Juan Rodríguez



Calvo, Nicolás Ruiz Gómez, José Raposo Rodríguez, Manuel Sánchez Fernández y Francisco Delgado Gordillo Y ¿qué alegaban para estas detenciones? Se les detenía por militancia en el Partido Comunista y en las incipientes Comisiones Obreras, ambas organizaciones como sabemos en esos tiempos totalmente ilegales y principales opositoras a la dictadura en el ámbito obrero. Años más tarde en 1973 este sindicato ilegal daría lugar al Proceso 1001 del Tribunal de Orden Público que llevó a prisión a toda la dirección de Comisiones Obreras.

¿Qué pretendían? Dar un escarmiento, crear temor y acabar con estos movimientos obreros. Manuel Romero Pazos fue condenado a tres años y medio de prisión, la más dura que hubo entre los condenados. El proceso lo dirigió el Tribunal de Orden Público que aplicaba la Ley 45/1959. Refiere su nieta M^a Dolores, que su abuelo fue un hombre luchador, honrado, justo, incorruptible y trabajador. Consiguió crear un sindicato obrero desde dentro del sindicato vertical, luchó por la seguridad social, por el desempleo y por un sueldo digno. Cuando lo detuvieron le pegaron brutales palizas con botas de hierro militar, hasta orinar sangre y sin embargo no lograron que delatara a otros compañeros de la lucha. Físicamente era delgado y bajito, pero tenía una irresistible fuerza física y una solidaridad con sus compañeros innegable.

Su hija Dolores Romero, hace mención a una conversación que mantuvo con Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia, en la que le contó que la novela que escribió titulada “La Huelga” uno de los protagonistas era su padre. En esta obra, la Duquesa criticaba sin reservas a la dictadura franquista, a los caciques, al paro, al hambre y a la persecución a la que se veían sometidos los jornaleros. La publicación de este libro, provocó el exilio en Francia para evitar la condena que la denuncia de los caciques de esta zona hicieron al extinto Tribunal de Orden Público, cuya sentencia final publicada en La Vanguardia el 25 de abril de 1970 indicaba, entre otras cosas:

Es imputable a la procesada el delito de injurias, pues dado el hecho, aunque fuera imaginario, sus personajes tienen una realidad nominalmente determinada en aquel tiempo y lugar. El juicio de sus actividades profesionales está, además, descrito con descrédito y menosprecio, con publicidad escrita y es objetivamente ofensivo, con este ánimo preciso para resaltar una situación social injusta -interpretada por quien sale del territorio nacional para emitir sus juicios adversos e inventar conflictos-, además de hacer intervenir en ellos a autoridades y agentes, a quienes desacredita intencionadamente.”

De ese modo, por el delito de “injurias a una clase determinada del Estado”, se condenó a la acusada a un mes y un día de arresto, y a una multa de 3000 pesetas. Para entonces, la Duquesa Roja ya se había exiliado a Francia, desde donde prosiguió con su campaña en contra de la Dictadura, hasta su regreso a España en 1976. Hay una leyenda



que dice, que por el camino donde transitaba Manuel, se siente un escalofrío y es el espíritu de Manuel , que sigue caminando hacia el bar y vuelve a casa donde le espera su mujer Antonia y que no se irá hasta que no se haga justicia social, porque él lo sabe, que el pueblo se rebelará de nuevo contra los tiranos que nos gobiernan y que han dado marcha a tras a los logros conseguidos con la lucha de los obreros. En 1999 el Ayuntamiento de Sanlúcar le rindió un homenaje tras su fallecimiento, concediendo su nombre a una plaza en el Barrio Alto.

Hasta aquí la historia de los testimonios orales, que nos acercan a personas que no figuran en los archivos oficiales y es una forma de enriquecer nuestra percepción de aquellos hechos silenciados por la dictadura. Gracias a Ana y Dolores Romero Pazos, a la hija y a la nieta de Manuel Romero Pazos , Dolores Romero y Dolores Morales y a Eduardo Sánchez Fernández, presidente del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda.

Rafael García Muñoz, un anarquista sanluqueño¹

José Luis Gutiérrez Molina

El miércoles 20 de noviembre de 1940, Purificación Treviño Martínez llegó a las puertas de la prisión de Jerez de la Frontera. Llevaba un kilo de boniatos asados que sabía le gustaban mucho a su compañero, Rafael García Muñoz. Le darían unos instantes de distracción y gusto. Bastante hambre, malos tratos y humillaciones, llevaba encima. No pudo entregárselo. Aquella mañana había sido pasado por las armas. Purificación enloqueció. Su dolor aumentó cuando le negaron conocer donde había sido enterrado. Las personas como su marido –le dijeron- no tenían derecho a que visitaran sus restos. Así recordaba, muchos años después, su hijo Rafael García Treviño cómo había conocido su madre el asesinato de su padre y la reacción que tuvo. Después vino el silencio y el olvido. El

1 Para este artículo se han utilizado las siguientes fuentes documentales: “Documentos entregados por el general Cuesta. Provincia de Cádiz. Hechos ocurridos en los pueblos de esta provincia y fechas de liberación” (Servicio Histórico Militar. Archivo de la Guerra de Liberación. Zona Nacional, Ejército del Sur, Legajo nº 35, Carpeta nº 6, Armario nº 18) Archivo General Militar de Ávila Archivo Tribunal Militar Territorial Segunda (Sevilla) Causa 188/36 contra el cabo de carabineros José Canalejo Moreno por rebelión militar (Legajo 106/3033) y Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 3654/39 contra Rafael García Muñoz por adhesión a la rebelión (Legajo 33/1250). Igualmente la entrevista realizada en 2003 a Isidoro Romero de la Osa que me ha proporcionado el historiador José María García Márquez.

También he manejado la bibliografía siguiente: Barbadillo Rodríguez, Manuel, *Excidio. La Guerra Civil en España*, Edición Autor, Sanlúcar de Barrameda, 2002 y Viejo Fernández, José Antonio “Las luchas obreras en Sanlúcar de Barrameda (1932-33). Los revolucionarios de la CNT en acción”, en C. Alcalá Ortiz (coordinador), *Niceto Alcalá Zamora y su época*, Córdoba, Patronato Alcalá Zamora-Diputación, 1998 págs. 543-556 y *La Segunda República en Sanlúcar de Barrameda (1931-1936)*, Sanlúcar de Barrameda, ASEHA, 2011.



cadáver se pudrió en el cementerio jerezano y su personalidad apenas era recordada más que por sus familiares y los supervivientes del exterminio social practicado en Sanlúcar de Barrameda, como en el resto del país, por los golpistas de 1936 y el estado franquista. Uno de los muchos que se pueden encontrar por pueblos y ciudades de toda la nación.

1. "Jefe principal y alma de vida de la CNT de Sanlúcar... anarquista de acción"

Así calificaba un informe de la Falange sanluqueña a Rafael García Muñoz. Fue redactado a mediados de junio de 1939 cuando iba a ser devuelto a su pueblo desde Alicante. En Sanlúcar la noticia debió alegrar a muchos. Por fin había caído al que consideraban uno de los principales representantes de todo lo que el golpe de estado quería exterminar. Otros, como el alcalde socialista Bienvenido Chamorro Merino y el cabo de carabineros Jose Canalejo Moreno, habían sido asesinados el mismo verano de 1936. Faltaba García Muñoz uno de los anarcosindicalistas más radicales. Guardia Civil, Falange y el Ayuntamiento remitieron informes sobre el detenido. Había nacido en Sanlúcar el 22 de agosto de 1896. En el Registro Civil figuraba inscrito únicamente con los apellidos de su padre Manuel García Cordero ya que se le daba como hijo de madre desconocida. En realidad no era así. Se sabía que era Joaquina Muñoz. Pero, al no estar casados, su nombre no fue incluido.

Poco conocemos de su formación ideológica y primera militancia sindical. El historiador José Antonio Viejo le sitúa como activo militante en la sociedad de los viticultores radicada, a comienzos de los años veinte, en la calle Carmen Viejo. El informe municipal de 1939 decía que era "anarquista desde hace muchos años". En 1921 había sido detenido junto a Antonio González García, "El Rubito", su vecino de la calle Sebastián Elcano, compañero de juegos de la infancia, también prestigioso obrerista y, en los años treinta, representante de la línea menos radical del sindicalismo local. En marzo de 1930 abrió sus puertas la asociación cultural "Aurora Nueva". En su directiva figuraba Rafael Muñoz. Apenas pudo funcionar un año hasta que fue clausurada, en enero de 1931, por las autoridades monárquicas. Para entonces, como en otros muchos puntos del país, la CNT había renacido vigorosa.

Durante los años republicanos fue el sindicato mayoritario de Sanlúcar. Uno de sus pilares era la sociedad "La Sembradora" que reunía en su seno al grupo más numeroso e influyente de la clase obrera, los viticultores, además de campesinos y hortelanos. García perteneció a su directiva en la que se convirtió en el representante de los sectores más decididos a convertir la recuperada libertad en el camino hacia la revolución social. Para entonces ya se había incorporado a la Federación Anarquista Ibérica. Pertenecía a un grupo que adoptó, entre otros, los nombres de "Acción Libre" y "Luz Libertaria".



Entre abril de 1931 y julio de 1936 se convirtió en una de las referencias del anarcosindicalismo local. Su verbo encendido retumbó en asambleas y mítines defendiendo el abstencionismo electoral, la acción directa en las relaciones laborales y su ideología anarquista. Estuvo entre quienes exigieron a las nuevas autoridades un mayor compromiso reformista y otra actitud ante los problemas sociales que la de un problema de orden público. Perteneció a diferentes comisiones de huelga, fue secretario de su sociedad y presidente de la Federación Local de Sociedades afectas a la CNT. En mayo de 1936 acudió al congreso confederal que tuvo lugar en Zaragoza, de cuyos acuerdos informó a los afiliados en una asamblea celebrada el 20 de mayo. En julio era el secretario local. Fue detenido en varias ocasiones y, en dos, procesado y condenado a un total de 10 meses de prisión. La primera tuvo lugar, a finales de mayo de 1932, durante la huelga general convocada en apoyo de la campesina de Sevilla. Acusado de coacciones le cayó una pena de seis meses. Otra le tuvo otros cuatro entre rejas.



En julio de 1936, Rafael García Muñoz representaba para la patronal y la derecha ideológica sanluqueña lo peor de los cambios producidos los cinco años anteriores. Aquellos, muchas veces con vínculos familiares, que poseían más de la mitad de la riqueza rústica del término, que no habían aceptado el cambio de régimen, ni la pérdida de poder que les significó dejar de controlar los ayuntamientos, al no poder revertirlo se entregaron a la conspiración. El triunfo del Frente Popular les lanzó abiertamente al golpismo.

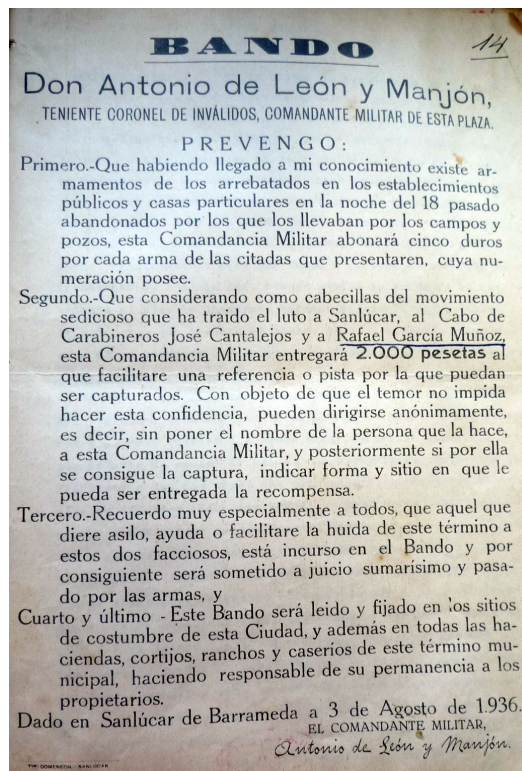
De “peligrosísima” calificó Domingo Bandrés Muñoz, comandante del puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar en 1939, la figura de Rafael Muñoz en la resistencia que ofreció la población a su ocupación. Unas palabras que ponen de manifiesto la idea golpista de que lo habían sido quienes les resistieron y no al contrario. Una mentira repetida una y otra vez durante cuarenta años. Otro tópico es que la reacción a la sublevación fue desorganizada y violenta, que no supo ni pudo resistir ni siquiera el primer envite de las fuerzas golpistas. Es la versión que aparece en el escrito de Manuel Barbadillo y en el relato que la Guardia Civil hizo para Cuesta Monereo unos años después. Sin embargo no fue así.



La resistencia tuvo una organización en la que participaron republicanos, socialistas y cenetistas que actuaron de forma coordinada. La CNT sanluqueña siguió las directrices del Comité Nacional que recomendó a sus federaciones que la respuesta fuera unitaria y, si la lucha continuaba, la recondujeran hacia la revolución. Durante la tarde del 17 la noticia se difundió por la localidad. La mañana del sábado 18 era de dominio público. Numerosos grupos se formaron ante los establecimientos que contaban con aparatos de radio para oír las informaciones de las emisoras de Sevilla, Jerez y Cádiz. Hacia las dos de la tarde las autoridades conocieron que el golpe había comenzado en Sevilla y Cádiz.

El alcalde Bienvenido Chamorro ordenó a la Guardia Civil y a los carabineros de Bonanza que se acuartelaran. Dos horas más tarde la CNT tenía previsto realizar un acto en el teatro Victoria con la intervención de los militantes catalanes Arturo Parera, María Durán y Francisco Arín. Chamorro y Rafael García tuvieron una reunión y acordaron suspenderlo. Además se ordenó la detención de conocidos extremistas de derecha y que la Guardia Municipal recorriera las calles cada vez más llenas de hombres y mujeres expectantes.

Los sindicalistas se reunieron en el local de los viticultores en la calle Luis de Eguilaz. La asamblea fue muy agitada. Hubo coincidencia total en declarar la huelga general, pero se dividió en si oponerse con armas al golpe. "El Rubito" lo consideró un suicidio. Cao y García Muñoz, lo defendieron. Sin acuerdo, al finalizar la reunión muchos de los asistentes se dirigieron hacia el ayuntamiento. Otros permanecieron en el Barrio Alto. Allí, en la plaza de Jerez, Antonio González llamó a la resistencia pasiva. Rafael García entró en el ayuntamiento. Poco a poco la ciudad se fue paralizando y comenzó la búsqueda de armas por parte de los grupos más decididos y la desactivación de los apoyos que el golpe pudiera tener en la ciudad. La ferretería El Candado y el Sport Sanluqueño fueron registrados para coger las armas que hubiera. También el Monte de Piedad en donde se guardaban las escopetas empeñadas o pignoradas.





Entrada la noche, García junto a otros compañeros, recogieron en diversos puntos de la población las pistolas que tenían escondidas. Después ordenaron a los empleados municipales que les proporcionaran herramientas para levantar las vías del tren y cortar las carreteras de acceso a la población. Al amanecer del domingo 19 una barricada cerraba el paso en el Pinar del Picazo, donde se unían los accesos desde Jerez y El Puerto de Santa María. Aunque la estrategia elaborada no acabó de desplegarse por completo. Durante la madrugada había fracasado el intento de dividir a la treintena de guardias civiles acuartelados en el Barrio Alto. Tampoco estaba clara la actitud del medio centenar de carabineros.

Ya de día, mientras se conocía la rendición de las autoridades gaditanas, continuó el registro de casas y la detención de extremistas derechistas. Algunos hombres se desplegaron por las azoteas y grupos de mujeres animaban a las sirvientas para que abandonaran las casas. Desconocemos la participación directa de Rafael García en estos acontecimientos. Hubo quien, en 1939, le acusó de hacerlo personalmente en las detenciones de los derechistas. Como tampoco si intervino para parar el intento de linchamiento del abogado Celedonio del Prado Mosquera y su hermano político, José Díaz Trechuelo. Un hecho que motivó la salida de la Guardia Civil del cuartel, los primeros enfrentamientos y una docena de heridos.



Entonces Chamorro ordenó a los carabineros que acudieran a la ciudad. Así lo hicieron sabiendo que el golpe había triunfado en Cádiz y Jerez y que, en unas horas, fuerzas golpistas llegarían a Sanlúcar. Pasado el mediodía hizo su entrada un camión con soldados de Jerez. Los de la barricada no se opusieron. Barbadillo afirma que huyeron en desbandada. Sin embargo no cuadra con lo ocurrido en las horas anteriores, ni con lo que ocurrirá en las posteriores. Quizás, en un intento de evitar el enfrentamiento, se pensó que lo mejor fuera dejar entrar a la tropa y confiar en que los carabineros los detuvieran.

Fuera como fuese el camión, disparando, bajó por el carril de San Diego hasta el ayuntamiento. Los carabineros esperaban a su jefe que estaba con las autoridades. Finalmente decidieron ponerse al lado de los golpistas. La corporación municipal fue destituida y se formó una comisión gestora presidida por Antonio León Manjón. Después se



leyó el bando declarando el Estado de Guerra, se ordenó terminar la huelga, entregar las armas, el toque de queda y se prohibió la formación de grupos.

Aunque los golpistas se habían apoderado del ayuntamiento y disponían de una apabullante superioridad en hombres y armas la situación estaba lejos de estar dominada. La población continuaba paralizada y los trabajadores controlaban el Barrio Alto. En él tuvo que estar Rafael García hasta el martes 21. Los golpistas no se atrevían a ocupar por completo la ciudad. Habían dictado nuevos bandos, organizado una Milicia Ciudadana y establecido controles de entrada y salida. Esa tarde ocurrió un hecho que debilitó su posición: una columna de guardias civiles y paisanos enviada a la vecina Trebujena fue emboscada y tuvo que retroceder con varios heridos de los que uno falleció. Una derrota que reanimó a los que continuaban “paqueando” durante la noche, reuniéndose en los bares y desobedeciendo al bando de guerra.

La mañana del martes 21 llegó el cabo de carabineros José Canalejo Moreno. Destinado en el puesto de “Media Legua” estaba dispuesto a defender al gobierno. Intentó conseguir el apoyo de sus compañeros. No lo logró. Entonces contactó con los comités republicano, socialista y de la CNT. Encima de un mostrador del puesto de churros de la Puerta de Jerez, ante varias decenas de obreros, les animó a atacar a los golpistas. Se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil y pidieron a los guardias que se les unieran. La respuesta fue una descarga que alcanzó a uno que murió al día siguiente. El grupo se dispersó y volvió a reunirse en El Cantillo en donde se les unieron, entre otros, Rafael García y José Cao. Tomaron el fielato de la calle Santa Brígida y desarmaron a sus ocupantes. Desde allí Canalejo llamó al Gobierno Militar de Cádiz fingiéndose el jefe de una columna que procedía de Sevilla. La llamada alertó de lo que ocurría en Sanlúcar. A las pocas horas una compañía de fuerzas africanas se dirigió hacia ella.

La resistencia terminó definitivamente cuando llegaron las tropas. En la cuesta del Ganado un grupo intentó hacerle frente. La primera embestida fue detenida y los rebeldes se replegaron. Esperaron refuerzos de Jerez y volvieron a atacar, esta vez con mejor éxito tras volar una casa con bombas de mano. Al menos 12 personas murieron y otra veintena resultaron heridas. Esa noche se produjo la huida de la población al campo y al cercano coto de Doñana. Hasta barcas, en medio del río, sirvieron de refugio. Para entonces el grupo de Canalejo se había lanzado al campo.

Eran una treintena de campesinos entre los que estaba Rafael García. Atrás dejaba a su compañera y sus cuatro hijos -Libertad, Amor, Nardo y Elio- de 5, 3, 2 y apenas 1 año. Como a tantos, en 1940, los triunfadores les cambiaron sus nombres por otros del santoral católico. Durante varios días Canalejo y los cenetistas se desplazaron por



los cortijos de la zona. León Manjón, comandante militar golpista, llegó a publicar un bando, al más puro estilo del oeste norteamericano, en el que ofreció 2.000 pesetas a quien proporcionara datos para la captura del carabinero y Rafael García. Perseguido y, cada vez más cercado el grupo terminó disolviéndose. Canalejo se refugió en su pueblo natal, Los Molares, en Sevilla. Allí se entregó en agosto. Fue pasado por las armas en los fosos de la Puerta de Tierra gaditana el 26 de septiembre. Rafael García alcanzó la zona republicana. Mientras, Sanlúcar comenzó a vivir bajo la ocupación. Un centenar de personas terminarían siendo asesinadas. Muchas, ese mismo verano. Durante meses la población pareció una colonia norteafricana con sus casas llenas de banderas blancas y sus calles desiertas y silenciosas. Como “un eterno viernes santo”.

2. El Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 256/39 al comisario Rafael García

Desconocemos por donde escapó el cenetista. En 1940 declaró que llegó a Ronda tras diez días campo a través. Como lo hicieron centenares de habitantes de la campiña. También es posible que ocultara cual fue su auténtico camino. Manuel Barbadillo ha escrito que, tras embarcar en La Algaída, se dirigió a Huelva desde donde pasó a la zona gubernamental. En cualquier caso, en agosto estaba en Ronda. Tuvo que ser durante esos días cuando fue herido y evacuado a Málaga.

Terminaba septiembre cuando, de Madrid, llegó Manuel Mora Torres. Otro destacado cenetista andaluz, de Carmona. Organizó la Columna Ascaso. De la 2ª de sus centurias se hizo cargo Rafael García. Hasta la pérdida de Málaga, en febrero de 1937, estuvo destinado a las operaciones que se realizaron en los frentes de Antequera y Bobadilla. Después pudo escapar hacia Almería. En el campo de Viator fueron reorganizadas las unidades. Entró en un batallón destinado al frente del Jarama. Después fue enviado a la escuela de comisarios de Valencia. Los comisarios de guerra tenían una función tanto de carácter social y política como de formación y divulgación cultural. Además de la de “hablar con el enemigo” a través de los “altavoces del frente”. Tras un rápido curso fue incorporado a la 114 Brigada Mixta. Tras recibir instrucción

INCUPLADOS	SITUACION
Rafael García	Comandante al Jarama
Joaquín Almaraz	Manejador de Armas 2-3-40
	Transferido a la Carcel de Bobadilla de Jerez



en Ciudad Real fue enviada al frente extremeño. En unas escaramuzas en las cercanías del río Guadamellato, en el sector de la población cordobesa de Villaharta, su voz fue reconocida y en las páginas del diario sevillano ABC (11.8.1937) fueron comentados sus discursos.

En octubre de 1937 fue trasladado a la 73 Brigada Mixta que cubría los frentes cordobeses de Los Blázquez y Valsequillo. En diciembre fue nombrado comisario accidental de la 76 Brigada Mixta en la zona jienense de Cierzos-Cornicabra. El 20 de enero de 1938 quedó adscrito a la comisaría del Ejército de Maniobra, la unidad encargada de ejecutar las ofensivas, en la 72 División en Caspe. Con ella participó en los combates que terminaron con el hundimiento del frente aragonés. Estuvo en Belchite y en Alcañiz donde su unidad quedó copada. Rafael García logró llegar a Barcelona.

A finales de julio fue destinado a la 214 Brigada Mixta en el frente de Levante, en La Puebla de Valverde. En la defensa de los accesos a Valencia permaneció hasta que, el 7 de marzo de 1939, marchó a Madrid para participar en los combates que, tras el golpe de Casado, tuvieron lugar entre unidades comunistas y anarquistas y socialistas. Allí permaneció hasta la entrada de las tropas franquistas el martes 28 de marzo. Se dirigió a Alicante buscando a los buques que, se decía, estaban esperando a quienes quisieran escapar. No pudo embarcar. Fue hecho prisionero. Como oficial del Ejército Popular quedó detenido en el castillo de San Fernando. Ante la pregunta de si tenía en Sanlúcar a personas que respondieran de su actuación, Rafael García respondió que en “todas las clases sociales”. En efecto, era recordado pero no en el sentido que quizás podía esperar.

El 12 de junio de 1939 Marcelino Rancaño Gómez, Jefe de los Servicios de Justicia de Cádiz, consideró que existían motivos suficientes para abrirle procedimiento. Así se lo ordenó a Antonio Alos Guerrero, juez militar de Sanlúcar. Durante mayo, las autoridades sanluqueñas le habían remitido documentación que consideraban incriminatoria. Su militancia anarquista demostrada en las cartas de la CNT local que había firmado como secretario y su credencial de delegado al congreso de Zaragoza, intervenida en un registro. De otro, partes y declaraciones de guardias municipales y vecinos, realizadas el mismo verano de 1936, y diversos informes de Falange, el Ayuntamiento y la Guardia Civil lo situaban como uno de los principales organizadores de la resistencia al golpe y participante en el grupo formado por Canalejo.

Hasta tres municipales de servicio en el ayuntamiento declararon que había estado dando órdenes y conferenciando con el alcalde y su secretario. Otros empleados del servicio de Vías y Obras atestiguaron que le habían visto en los camiones que habían ido a buscar armas, levantar las vías del tren, abrir zanjas y preparar barricadas. Los funcionarios del fielato le reconocieron como uno de los que desarmaron a los municipales. Los informes de 1939 ofrecían de Rafael García la imagen de un “anarquista de acción y hombre



decidido”. El delegado de investigación de Falange aseguró que había sido quien, en mayo de 1936, alentó a la muchedumbre para que asaltara el Pósito de Pescadores durante la huelga de los marineros. Un hecho que no parece que hubiera sido así. Antonio Ibáñez Enríquez, el armador agredido cuando el asalto del Pósito, declaró que no podía ratificarlo más que de forma indirecta. Además había defendido la resistencia armada al golpe en la reunión del 18 de julio en el local de la CNT y desarmado a derechistas en las calles. El negociado de Orden Público del Ayuntamiento puso como testigos de su participación en la resistencia a algunos de los más destacados miembros de las “fuerzas vivas” de la localidad como Antonio León Manjón, Diego Merguelina, Celedonio del Prado, José Argüeso González, José Nudi Ruiz de Samavia, José García Muñoz y otros hasta un total de 16. También mencionó que, en octubre de 1936, se había dictado una requisitoria contra él publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Alos solicitó su traslado a Sanlúcar.

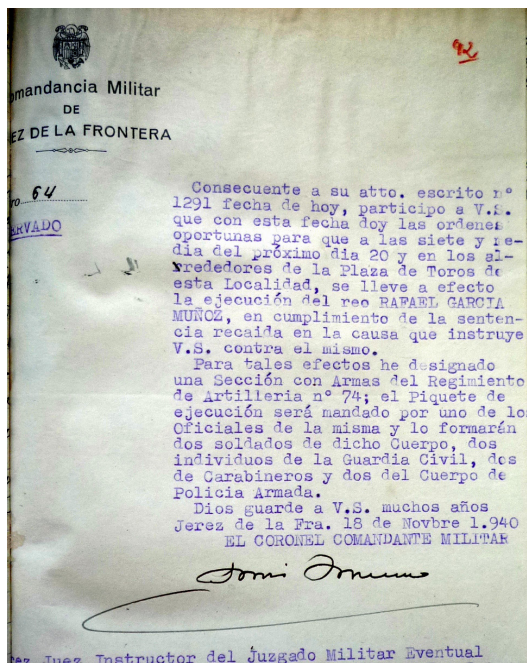
El 11 de agosto Rafael García viajó con destino a la Prisión Provincial de Cádiz. En el Depósito Municipal de Sanlúcar ingresó la mañana del 5 de septiembre. Dos días después el juez lo interrogó. García rechazó todas las acusaciones. No negó su militancia y protagonismo en la CNT local, aseguró que huyó por miedo y señaló a varias personas en Játiva, Madrid y Valencia que podían declarar sobre su conducta. Después Alos Herrero ordenó su procesamiento por un delito de adhesión a la rebelión por ser un anarquista convencido, que había formado de cuantas juntas sindicales habían existido en la población, y haber sido “el alma del alzamiento en contra del Movimiento Nacional” por lo que cabía atribuirle cuantos sabotajes, asaltos y detenciones tuvieron lugar en la localidad. “En la zona Roja” tuvo una destacada actuación ya que alcanzó el grado de Comisario de Brigada. El auto es un modélico ejemplo de la justicia al revés franquista. Los golpistas acusaban de serlo a quien no lo había sido y su resistencia se convertía en rebelión.

El procedimiento siguió su curso. Declararon las personas citadas por García. Entre ellos su viejo amigo Antonio González, que afirmó que lo conocía de la CNT, y un médico de la 114 Brigada Mixta que se había pasado a la zona rebelde y que sólo dijo que bebía demasiado. El Servicio de Información de la Policía Militar remitió su informe a finales de septiembre basado en un escrito que el propio García había enviado al Comisario Inspector del XIX Cuerpo de Ejército detallando su trayectoria hasta su incorporación a la 66 División.

Durante octubre y parte de noviembre de 1939 la instrucción sufrió un parón. Alos Guerrero la abandonó y fue sustituido por Federico Pessini Abarrategui, un abogado incorporado a tareas judiciales militares. Su primera actuación fue tomar declaración indagatoria al ya procesado. Muñoz se limitó a ratificarse en lo que había manifestado y Pessini, por su parte, el 7 de diciembre, hizo lo mismo con su procesamiento. Desconocemos cuando fue trasladado a la Prisión de Partido de Jerez de la Frontera. El 6 de mayo de 1940 fue en esa cárcel donde recibió



la noticia de que al día siguiente, a las 10 de la mañana, iba a comparecer ante un consejo de guerra y que debía nombrar defensor. En el sumario figura una diligencia por la que Rafael



García escogió a Antonio Martínez de Salazar Moyano entre una lista que se le presentó. Iba a defenderlo una de las personas que había puesto en marcha, como juez instructor, la justicia golpista en Cádiz hacía dos años. También comenzaron a actuar en 1937 los que fueron presidente, vocal ponente y el fiscal del consejo de guerra: Rafael Lopez Alba, un militar retirado en 1931 e incorporado a las huestes golpistas; Fernando Wilhelmi Castro, juez de 1ª Instancia, y Alfonso Palomino Blázquez abogado. Los vocales – Gabriel García Trujillo, Alfonso Pérez Más y José Toscano Barberá – también eran habituales de los consejos de guerra. Poco diferenciaba éste a cualesquiera en los que habían participado con anterioridad.

El acta de la vista no aporta grandes detalles. Leídos los autos, Martínez de Salazar y López Alba interrogaron a García. Nada sabemos de ellos. Después el fiscal Palomino mantuvo la acusación de adhesión a la rebelión y pidió la pena de muerte. El defensor solicitó que se considerara al delito como auxilio a la rebelión y que la condena fuera de 12 años. Finalmente habló Rafael García. Lo hizo para pedir que no constara que era condenado por traidor. Sabía que lo iban a matar y seguía pensando que su resistencia no había sido ninguna traición. Le iban a quitar la vida pero buscaba mantener su dignidad.

La sentencia es otro ejemplo de justicia al revés. Asegura, sin el menor rubor, que, con el carabinero Canalejo, había iniciado un movimiento revolucionario en Sanlúcar durante el que se cometieron numerosos desmanes. Cuando la población fue “liberada” huyó a la “zona roja” en cuyo ejército ocupó cargos desde los que maltrató a sus subordinados. Tanto su “conducta externa como antecedentes” demostraban “una completa identificación con las directrices y procedimientos de violencia del movimiento revolucionario de carácter comunista iniciado en gran parte del territorio nacional el diez y ocho de julio de mil novecientos treinta y seis”. Da idea del calibre de la justicia franquista que algo parecido pudiera escribirlo un antiguo juez de 1ª Instrucción para justificar una condena a muerte. Su “peligrosidad social” y “perversidad” le hacía merecedor de la pena de mayor gravedad: la de muerte.



Veinte días más tarde la Auditoría de la Segunda Región aprobaba el fallo por considerarlo acertado, legal y no apreciar vicios de nulidad. Todo quedaba en manos del enterado o indulto de Francisco Franco. Mientras, Rafael García volvió a la cárcel de Jerez. Contamos con el testimonio del socialista de Aracena Isidoro Romero de la Osa que, muchos años después, recordaba la estrecha relación que había establecido con él en la prisión jerezana y como, en el transcurso de las conversaciones que mantenían tras conocer la sentencia, le decía que nada tenía que temer hasta que no le llamaran de las oficinas.

Fueron pasando los meses. El 10 de octubre de 1940 Franco dio el enterado. Otro mes después la maquinaria se puso en marcha. El 11 de noviembre, el Gobernador Militar de Cádiz recibió de Sevilla un telegrama de la máxima autoridad militar de la región en el que le comunicaba que le devolvía el procedimiento para el cumplimiento de la pena. A los seis días llegó al juzgado militar de Jerez. José Pérez de las Heras, adscrito a éste, comenzó las actuaciones para la ejecución. El lugar señalado fue “el acostumbrado”, en los alrededores de la plaza de toros. La fecha, el miércoles 20 a las 7,30 de la mañana. El piquete lo formarían 2 soldados del Regimiento de Artillería 74, 2 números de la Guardia Civil, 2 carabineros y 2 policías armados. Lo mandaría un oficial del regimiento de artillería. También pidió al ayuntamiento que enviara un ataúd y a Sanidad un médico militar que certificara la muerte. Finalmente, Pérez de las Heras se desplazó a la prisión y le notificó a Rafael García que la sentencia iba a ser cumplida. El médico Luis Encinas Álvarez certificó la muerte. El juez José Ivisón Sánchez Romate, encargado del Registro Civil, inscribió el 3 de diciembre la defunción en el Libro I, folio 311, con el número 726. El cadáver fue enterrado en la fosa común.

El lugar que le fue negado conocer a su viuda.

José Luis Gutiérrez Molina



Resistencia y represión en Trebujena: El tiroteo con la Guardia Civil en la carretera de Sanlúcar

José García Cabrera
Licenciado en Antropología Social,
Profesor de Educación Permanente

Fernando Romero Romero
Patrimonio Documental y Bibliográfico
de Andalucía y América (PAIDI Hum-340)

Trebujena es uno de los municipios gaditanos donde los rebeldes precisaron de la intervención de fuerzas externas para hacerse con el control de la localidad. La rápida reacción de la corporación municipal, presidida por Juan Galán Barba y la movilización de los afiliados de Centro Instructivo de Obreros del Campo (CIOOC) impidieron que la dotación del puesto de la Guardia Civil declarase el estado de guerra. El 19 de julio los guardias permanecieron acuartelados, mientras el CIOOC declaraba la huelga general y la alcaldía disponía la recogida de armas –que fueron depositadas en el ayuntamiento bajo recibo– y que se controlase el único teléfono público que había en el pueblo.

El día 20 se distribuyeron las armas entre grupos de trabajadores y se cortaron con zanjales las dos carreteras que dan entrada al pueblo. El estado de excitación y nerviosismo aumentaba y el centro obrero envió delegados a Sanlúcar para informarse de la situación. Fue precisamente de allí de donde partieron, ese mismo día, las primeras fuerzas golpistas que trataron de ocupar militarmente Trebujena. La fuerza rebelde era un pequeño contingente de trece hombres, integrado por el jefe de línea de la Guardia Civil de Sanlúcar, teniente Manuel Soler Torrejón, el brigada Tomás López Recio, siete guardias civiles y cuatro falangistas.

El camión en el que viajaban tuvo que detenerse sobre las 16:00 horas ante la zanja abierta en la carretera, aproximadamente a 1,5 kilómetros del casco urbano de Trebujena. Un grupo de trabajadores que estaba parapetado en las viñas colindantes abrió fuego contra ellos y los obligó a retroceder con el resultado de un guardia muerto y siete heridos: el teniente, el brigada y cinco guardias más. Uno de los protagonistas de aquella acción, Antonio Caballero Tejero, a quien apodaban Titi Carallo y que fue sometido a un procedimiento sumarísimo tras permanecer toda la guerra oculto como topo, recordó el tiroteo en una entrevista publicada casi cincuenta años después, en la que omitió las bajas causadas a los sanluqueños:



Pero por la tarde, a eso de las 6, entró un coche por Sanlúcar y de ahí, en la carretera se cortó el puente de la Toya. Y el coche ahí se paró y al tiempo de pararse se le hizo fuego. [...] No supimos quién [disparó], porque habíamos tantos apostados, y cuando dispararon todos nos fuimos y ellos saltaron por el arroyo de la Toya y cogieron por todas aquellas viñas, y ya nosotros los que estábamos haciendo era rodear el pueblo.

Después de rechazar a los de Sanlúcar, algunos de los trabajadores que habían participado en el tiroteo volvieron al pueblo y, esperando un nuevo intento de ocupación, se dedicaron a fabricar cartuchos. Este es el contexto en el que tuvo lugar el asalto a un comercio para apoderarse de las cajas de munición que allí se expendían. Pero a las 17:30 se aproximó por la carretera de Jerez otro contingente de fuerzas sublevadas, una sección del Depósito de Recría y Remonta, bajo el mando del teniente retirado Manuel Mateo Salgado. Al ver acercarse la fuerza, los trabajadores que se encontraban apostados en la zanja –indica un informe de la Guardia Civil– «se baten en retirada haciéndole frente a ésta algunos atrevidos». Ocupado ya el pueblo, la Guardia Civil, después de ciertos titubeos, se puso a las órdenes del teniente Mateo y cooperó con los militares en los servicios de patrulla y vigilancia por las calles. Continuaron oyéndose algunos «disparos aislados de pistola» hasta que a las 21:00 horas de la noche quedó sofocada la resistencia.

El sargento de la Guardia Civil Juan Gutiérrez Rojas se hizo cargo del puesto de Trebujena el 26 de julio y permaneció en el pueblo durante diez meses. Asumió el papel de comandante militar de la plaza y fue, por tanto, el responsable de la feroz represión que hasta finales de año segó cerca de un centenar de vidas en la localidad. No sabemos hasta qué punto lo fue de los asesinatos de tres ciudadanos que fueron detenidos, conducidos a Jerez de la Frontera y, tras ser liberados, fueron eliminados en la temprana fecha del 31 de julio. De lo que sí tenemos constancia es de que el 9 de agosto remitió al comandante militar de Jerez de la Frontera, Salvador Arizón Mejías, cabeza visible de la sublevación en esta ciudad y máximo responsable de la represión desatada en ella, un atestado que trataba de clarificar quiénes fueron los autores del tiroteo contra fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército que ocuparon Trebujena el 20 de julio.

En el atestado prestaron declaración nueve vecinos de Trebujena, todos ellos trabajadores agrícolas, y un topógrafo –Jacinto Rueda Valiente– que circunstancialmente residía en la localidad. Todos estaban detenidos. En sus declaraciones, arrancadas sin lugar a dudas después de horas de golpes y palizas y bajo amenaza de muerte para que confesaran haber participado en los hechos que se investigaba y para que delataran a otros



compañeros que tomaron parte en los mismos actos, así como a los principales organizadores de la resistencia en el pueblo, los detenidos desgranaron los detalles de su propia participación y la de otros compañeros en las acciones del día 20. Los campesinos que reconocieron haber estado en el lugar del tiroteo con la Guardia Civil, si bien no todos admitían abiertamente haber intervenido en él, fueron Antonio Cabrera Robles, Nicolás García Ruiz (Garrocho) Pedro Chamorro García (Alcayata), Fernando García Gómez (El Cinzo), José Arana Cánovas (El Tirri), Miguel García Díaz (El Neguito), Miguel Galafate Arana y Antonio Ruiz Tejero (Zapata).

En sus declaraciones se decía que quienes organizaron la resistencia fueron dirigentes de izquierdas como el diputado socialista Juan Campos Villagrán y los líderes anarquistas Miguel Caballero Pazos (Manzana), y Juan Galán Requejo (El Zarandaor) y que en el lugar de los hechos también estuvieron Paco el Carallo (El Congo), Antonio Chacón, hijo del pastor de Monasterejo, el Rubio el Higuérón y José Marchena Barba (Capachita).

De estos, los seis primeros estaban en paradero desconocido; del Rubio el Higuérón se decía que estaba detenido, pero la investigación publicada por Luis Caro lo identifica como uno de los tres vecinos que fueron asesinados el 31 de julio; y el último, Capachita, había sido movilizado con el reemplazo de 1934 y acababa de incorporarse al Regimiento de Artillería de Costa nº 1 de Cádiz. Es posible que fuese precisamente el asesinato del Rubio el Higuérón y de otros dos hombres que estuvieron detenidos con él en Jerez lo que hizo que Capachita, un joven zapatero anarquista de veintitrés años, que inicialmente fue reacio a incorporarse a filas, se presentase en el acuartelamiento de Cádiz el 2 o 3 de agosto.

Quizás lo hizo creyendo que estaría más seguro vistiendo uniforme de artillero que intentando ocultarse en el pueblo o en las marismas, pero todo se precipitó dramáticamente cuando el comandante Arizón trasladó el atestado del sargento Gutiérrez Rojas al mando del Regimiento de Artillería de Costa nº 1. Las declaraciones de dos de los detenidos interrogados por el comandante de puesto, Miguel García Díaz y Antonio Ruiz Tejero, situaban a Capachita en el escenario del tiroteo con los guardias de Sanlúcar. El primero dijo que se dirigió con él al «sitio de la agresión» y el segundo declaró que se lo encontró en la carretera y le dio una pistola con varias balas, diciéndole «que disparase a cualquier fuerza que llegara, que había que defender el pueblo». El gobernador militar de Cádiz ordenó detener a Capachita, que quedó preso en el calabozo del acuartelamiento a disposición del comandante Eduardo Bonal Monreal, que había sido designado para instruir el procedimiento sumarísimo por su presunta participación en la «agresión» a la Guardia Civil el 20 de



julio. José Marchena negó haber tomado parte en aquellos hechos cuando el 11 de agosto declaró ante el instructor. Según su versión, ese día se quedó en su domicilio (en la calle Castelar, hoy Sol) atemorizado por los disparos.

Ni siquiera vio a Neguito y a Ruiz Tejero, que se presentó en la casa buscando armas, le entregó una pistola antigua que tenía y cuatro balas por «temor a incurrir en responsabilidades si guardaba el arma en su domicilio». Que había permanecido en la casa lo podían atestiguar varias vecinas que frecuentaban la tienda que tenía la familia en el propio domicilio: Carmen García Guerra, la Algabeña, Juana Fernández Pulido, la Canelita, Dolores Rincón Herrera, la Bolaña, y otras dos mujeres apodadas la de la Canasto y Pepa de Manolo el Ataturras.

Ese mismo día el juez instructor, acompañado por el alférez de complemento Manuel de la Quintana Ferguson en funciones de secretario, se trasladó a Jerez de la Frontera para que el comandante Arizón ratificase el parte que cursó a Cádiz y desde allí siguió hasta Trebujena, donde el sargento Gutiérrez hizo lo propio. En el cuartel de Trebujena también tomó declaración a la Algabeña, la Canelita y la Bolaña. La coartada de José Marchena se derrumbó cuando las tres mujeres dijeron que el 20 de julio permanecieron en sus respectivos domicilios sin salir a la calle para nada, que no lo habían visto en la tienda ni habían hablado con él.

A eso se sumó el demoledor testimonio del guardia civil Isidoro Martínez García, que presentó a Capachita como «persona de mala conducta y muy peligroso». Declaró que desde el cuartel lo vio pasar por una calle cercana empuñando una pistola Browning, que le constaba que había repartido seis pistolas entre la gente del pueblo y que había disparado contra la fuerza procedente de Sanlúcar desde una viña cercana a la zanja donde se detuvo el camión. El comandante Bonal decretó el 14 de agosto el auto de procesamiento y prisión contra José Marchena Barba por un delito comprendido en el bando del estado de guerra, concluyendo, en su único considerando, la existencia de «vehementes indicios de culpabilidad por su participación en los hechos desarrollados en la villa de referencia en el citado día».

A los cinco días de haberse iniciado la instrucción sumarial, el 16 de agosto, el comandante Bonal remitió sus conclusiones al auditor de la II División Orgánica y solicitó la elevación del procedimiento a plenario, es decir, su vista en consejo de guerra. Lo normal, en otras circunstancias, habría sido que la vista se celebrase al cabo de unos pocos días o semanas, pero lo que ocurrió es que Capachita, que había sido trasladado del calabozo del cuartel al Castillo de Santa Catalina, fue asesinado ese mismo día. No hubo juicio ni sentencia. El expediente estuvo paralizado durante cuatro



meses y medio y se archivó a principios de 1937 una vez que su fallecimiento quedó acreditado por un oficio del delegado de Orden Público que informaba de que a José Marchena Barba se le había aplicado el bando de guerra. Los trebujeneros que prestaron declaración en el atestado del sargento Gutiérrez no tuvieron mejor suerte.

Todos fueron eliminados. La mayor parte (al menos ocho), si no todos, fueron asesinados en la Peña del Toro, un paraje cercano a la carretera de Trebujena a Sanlúcar. La fecha de la saca está rodeada de cierta incertidumbre, pues las partidas de defunción de varios de ellos indican que se produjo durante el mes de septiembre, pero algunos testimonios orales apuntan al mes de agosto. Resulta un tanto desconcertante que el juez instructor del expediente de Capachita solicitase el 11 de agosto la ratificación del atestado del sargento Gutiérrez en lugar de interrogar directamente a Miguel García Díaz y Antonio Ruiz Tejero, cuyas declaraciones dieron pie a la apertura del procedimiento. ¿Por qué no lo hizo? Acaso ya los habían eliminado.

Nos preguntamos, por otra parte, cuál era la finalidad del atestado que Gutiérrez remitió a Arizón. En ese documento, el sargento decía que estaba destacado en Trebujena «a efectos de justicia». Podría tratarse de las primeras diligencias para que los Servicios de Justicia de la II División en Cádiz abriesen una causa por agresión a fuerza armada, pero los intentos de localizarla en el archivo de la Auditoría de Guerra han resultado, hasta ahora, infructuosos. En cualquier caso, en el supuesto de que la causa llegara a incoarse, se habría tratado de otro de esos procedimientos judiciales que acabaron –como el de Capachita– con los encartados fusilados antes de llegar al juicio. La otra alternativa es que se trate del informe con el que el recién nombrado comandante militar «justificaba» la aplicación del bando de guerra a los detenidos, lo que nos situaría ante una de las escasas evidencias –los archivos de las delegaciones de Orden Público y comandancias militares se han destruido o no están localizados– de que la represión estuvo controlada por los militares desde el primer momento

Bibliografía y fuentes

ARCHIVO DE LA GUARDIA CIVIL, Expediente personal de Juan Gutiérrez Rojas.

ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL Nº 2, Serie 8.000, legajo, doc. 2.734; Sumarísimos, leg. 1.282, doc. 31.973.

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA, Zona nacional, Fondos de Ejércitos, Ejército del Sur, Documentos entregados por el general Cuesta.

Caro Romero, L.: Trebujena 1936. Historias de la represión. Ayuntamiento de Trebujena, 2010.

Caro Romero, L.: «Trebujena 1936: Golpe de Estado y represión», en García Cabrera, J. y Orellana González, C. (Coords.): Memoria Histórica y represión franquista en la provincia de Cádiz, Diputación de Cádiz, 2011, págs. 241-265.

Gutiérrez Molina, J. L.: «Anarcosindicalismo y golpe de Estado en el Bajo Guadalquivir: El caso de Sanlúcar de Barrameda», en Orto. Revista cultural de ideas ácratas, nº 157-158, págs. 29-37.

«Entrevista», en El Avilejo. Revista de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Trebujena, marzo-abril de 1985, sin paginar.



Sanlúcar de Barrameda ante los antecedentes proautonómicos de Andalucía

Dr. Manuel Ruiz Romero.²

Centro de Estudios Históricos de Andalucía.

La llegada de la República representa un impulso singular en la descentralización del Estado. Las autonomías promovidas desde diversos territorios de España desde finales del siglo XIX o, como en el caso andaluz, a partir de las primeras décadas del XX, son por primera vez permitidas por la Constitución de 1931. Aunque la Carta Magna de 1978 en buena medida se inspira en aquellos preceptos, a diferencia de la republicana, no generaliza dicha posibilidad. Más bien, la deja a la libre iniciativa de aquellas zonas que políticamente lo reclamasen. Ello justificaría el rápido interés de catalanes y vascos desde la llegada del nuevo régimen, aunque también es justo decir que a lo largo de este periodo, la causa autonomista quedaría finalmente vinculada a la propia pervivencia y viabilidad de la República. Como ocurre en el caso andaluz, son muchas las iniciativas pro autonómicas que se habían impulsado para 1936 y que también frustraría el golpe militar. La historiografía de este proceso andaluz se encuentra bien documentada y dentro de lo que conocemos como *Andalucismo Histórico*; corriente historiográfica destinada al estudio de los antecedentes, promotores e iniciativas identitarias. Más allá de la propia vida, obra y legado de Blas Infante, nominado por el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados como *Padre de la Patria Andaluza*, las investigaciones de los últimos años han logrado perfilar un proceso institucional y social, lo suficientemente amplio, dinámico y lleno de matices, capaz de superar la propia dimensión unipersonal del notario de Coria como tradicionalmente se creía. Hoy por hoy, se encuentran documentadas alrededor de trescientos municipios que apoyan el impulso pro autonomista republicano. Nos cabe el placer y el honor de haber aportado cierta luz a la cuestión. Y con este trabajo un poco más.

La causa autonomista para Andalucía había sido impulsada desde principios de siglo XX aisladamente desde ámbitos andalucistas. Concretaban sus aspiraciones en el llamado *Manifiesto de la Nacionalidad* (1 de enero de 1919) y en la *Asamblea de Ronda* (1918), hitos ambos citados en los dos Estatutos de Autonomía que hemos tenido (1982 y 2007). Simbólicamente se solicitó por vez primera autonomía desde el Centro Andaluz de Sevilla en nombre de todos sus homólogos a su Diputación para que la demandara del poder central (noviembre de 1918). Y se entendía la misma como una identidad

2 .- Profesor de EGB, Doctor en Historia Contemporánea y doctorando en Periodismo. Miembro del *Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación* de la Universidad de Sevilla. Dirección electrónica: mruizromero@ono.com



cultural singular, necesitada para superar su dependencia de un autogobierno político articulado sobre los tres poderes clásicos (*ejecutivo, parlamento y poder judicial*).

Será desde el 14 de abril de 1931 cuando la causa adquiriera un definitorio cariz institucional. Días después de proclamarse la República se elevaría petición para iniciar el proceso pro autonomista por parte de los nacionalistas andaluces (organizados como *Junta Liberalista* en sustitución de los anteriores *Centro Andaluces*) dirigido a la Diputación de Sevilla. Se emprenderá así por parte de dicho organismo público un movimiento dinamizador que transcurre, inicialmente, por la inmediata consulta de la opinión a municipios y entidades sociales a partir de un primer sondeo de pareceres.

La articulación del intento autonomista se realizaría a través de cada una de las Diputaciones andaluzas como responsables, a su vez, de los municipios bajo su jurisdicción. Será el 30 julio de 1931 cuando la Corporación Sanluqueña conozca en su Pleno un escrito de la entidad gaditana al que acompaña un cuestionario, “*interesándose –se recoge en las Actas- se le remita a dicha entidad opinión sobre el particular en un plazo de 15 días*”. No cabe duda que los impulsores de la iniciativa no querían dejar pasar mucho tiempo para concretar el sentir andaluz; pero no es menos cierto también que la importancia de esta primera consulta coge de improviso a unas nuevas corporaciones que, como en el caso que nos ocupa, prácticamente se encuentran constituidas, o bien, son provisionales.

Precisamente, la imposibilidad de ofrecer una postura común entre todos los miembros de la nueva corporación, la trascendencia política de la consulta y la dificultad técnica que esconde la cuestión, justificaría que el asunto sea remitido a otro Pleno “*para el estudio dada su complejidad*”. No obstante, el concejal socialista Serrano Palma aprovecharía para hacer constar en Acta que no es partidario de la autonomía para la región andaluza. Posición ésta, abiertamente contraria a la de su compañero Hermenegildo Casas que, como diputado en Cortes y Presidente de la Diputación de Sevilla, se convierte durante los primeros años de República en el gran motor institucional de la iniciativa autonomista. A su vez, nueve semanas después del cambio de régimen es el Ayuntamiento de Marinaleda el primero en adherirse “*entusiásticamente*”.

Fruto de las primeras opiniones recabadas se redacta el *Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía* (agosto de 1931), cuyos contenidos federales, al ser matizados en diciembre por la nueva Carta Magna, sería reconsiderados. Sanlúcar, durante el Pleno del 3 de septiembre de 1931 conocerá un nuevo escrito de su Diputación aportando la primera propuesta estatutaria articulada, la cual también resulta publicada el día 1 del mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia. En dicha comunicación, se concede ocho días



de plazo para que los ayuntamientos y entidades ciudadanas concreten su opinión “*acerca del regionalismo andaluz*”. La confusión entre dicho concepto y autonomía es manifiesta.

Las diputaciones andaluzas se citan de nuevo el 23 de febrero de 1932, foro del que ve la luz un segundo texto articulado: *Bases para un Estatuto de Autonomía*. Proyecto que subraya la supremacía de las diputaciones sobre los municipios identificando la autonomía como una mera mancomunidad regional, sin el avance cualitativo que podría esperarse del momento histórico. Igualmente, aquella cita en Sevilla de los representantes de las diputaciones definió más la manera con la que se iban a articular los esfuerzos. La Diputación hispalense con Casas a su frente ejercería labor de coordinación de sus homólogas, para que, a su vez, éstas realizasen mediante *asambleas preparatorias* en sus territorios y ante sus respectivos municipios, fuerzas sociales, diputados y entidades ciudadanas. Siempre dando a conocer los textos que se iban redactando y sobre los que se demanda parecer.

Todo culminaría en una gran Asamblea Regional Andaluza a celebrar en Córdoba, inicialmente prevista para finales de dicho año, donde se aprobaría un estatuto de autonomía, el cual sería más tarde sometido a referéndum y elevado después a las Cortes para su debate y puesta en vigor. Proceso éste normalizado en la Constitución de 1931. Pese a todo este ímpetu inicial en pro del foro regional y de un texto consensuado, las circunstancias de Estado hacen que la prioridad política descentralizadora recaiga sobre el caso catalán. La cita andaluza se anuncia en tres ocasiones (abril, mayo y octubre) y, en aras de buena dosis de prudencia política se retrasa intencionadamente. Hecho éste que provocará no pocos desconciertos. A su vez, las Actas del Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar se hacen eco repetidas veces de la polémica suscitada por la inminente aprobación de un Estatuto para Cataluña que será aprobado en septiembre de 1932, al hilo también de la intentona golpista de Sanjurjo en agosto de ese mismo año.

La crispación socio-política y la conspiración contra la República se hacen cada vez más patentes, y eso se traduce en los intentos por recabar opiniones contrarias al autogobierno catalán toda vez que percibe por las formaciones conservadoras y determinados sectores sociales como una quiebra de la unidad de España. En algunos casos, y ante la insistencia de los más moderados (o reaccionarios en muchos otros), los concejales sanluqueños optan por dejar el tema sobre la mesa a falta de un mayor conocimiento del articulado (19 de febrero de 1932). En otras ocasiones, el consistorio se declara incompetente para valorar un asunto de Estado (26 de febrero). Pero recuperando el hilo de lo que sucede en nuestra tierra cabe señalar que en cumplimiento de los acuerdos de la *Comisión Organizadora de la Asamblea Regional Andaluza*, la Diputación gaditana convoca su asamblea provincial preparatoria el 21 de abril



de 1932. A la cita responden un limitado grupo de diputados y municipios -entre los que no se encuentra el sanluqueño- que se acompañan de entidades de carácter profesional y social. La reunión en la capital gaditana y en sede provincial girará alrededor de tres posiciones:

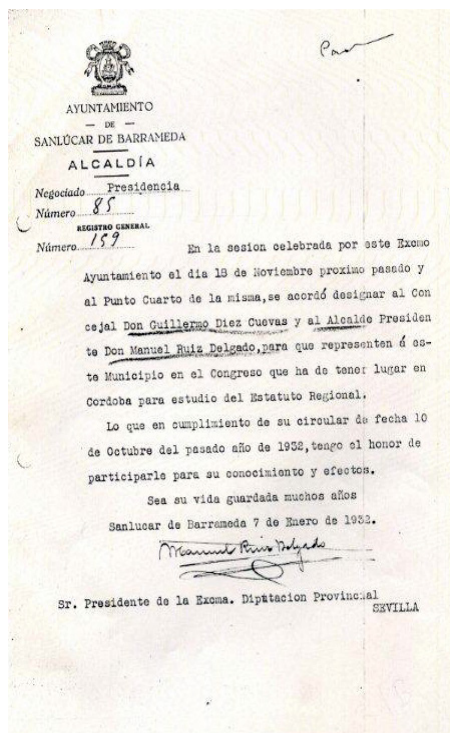
Quienes se muestran contrarios a la autonomía, toda vez que se la identifica con independencia y ésta como uno de los nuevos males que acarrea la República; los que se consideran partidarios de ella de forma moderada pero entienden que no existen condiciones políticas ni conciencia ciudadana a favor de ella y, finalmente, quienes apuestan decididamente por el autogobierno convencidos de que representaría un impulso al municipalismo, a la personalidad de Andalucía y la consolidación de las profundas reformas que trae la República. También habrá quienes afirman no sentirse capacitados para valorar esta nueva aspiración histórica o reclamen falta de representatividad en el encuentro. Finalmente, se acuerda un estrecho seguimiento a la cuestión mediante la asistencia a la cita andaluza de Córdoba y con la necesidad añadida de incrementar la campaña de difusión pública en favor de la autonomía. Cuestión que siempre se pretendía toda vez que los respectivos bocetos estatutarios eran editados y difundidos entre sectores y fuerzas vivas para excitar una opinión, y si fuese posible, de modo favorable. Al igual que lo fueron los actos públicos de izado de la bandera verde y blanca en muchos municipios andaluces.

Sanlúcar, inhibida de la cita preparatoria provincial, sí toma conciencia de los acuerdos allí alcanzados y, desde un primer momento abraza la necesidad de que su corporación estuviese presente en lo que llamó, tal y como titula un expediente al respeto de Secretaría (Sección tercera, Negociado de Gobernación nº 2983), el "*Congreso de Córdoba*". En sesión plenaria del 18 de noviembre de 1932 se designa al concejal Guillermo Díez Cuevas y al Alcalde, Manuel Ruiz Delgado como sus representantes, delegándoles para que averigüe su fecha definitiva una vez se tiene noticia de las prórrogas habidas y sobre las que ya se había interesado con anterioridad (21 octubre 1932). Designaciones que son comunicadas a Hermenegildo Casas como Presidente de la Coordinadora Regional. Fijado definitivamente el evento andaluz para finales de enero de 1933, Díez Cuevas en respuesta a un compromiso adquirido en la sesión donde se le nombra, eleva al Pleno del 9 de diciembre de 1932 una *Moción* (seis páginas y añadida al expediente citado), en la que reflexiona sobre las aspiraciones autonomistas y será asumida por la Corporación.

En ella contrapone al abandono del Estado centralista a "*las imprescindibles libertades de los municipios*", entendiendo que las amplias posibilidades de Sanlúcar se ven mermadas por obras "*que se dirigen desde Madrid*", aún mientras que los pueblos son la médula de la soberanía popular. A esta visión descentralizadora y municipalista añade una reclamación para que el tráfico por el



Guadalquivir y las competencias sobre zonas regables, y por tanto las posibilidades comerciales de Bonanza, fuesen reguladas desde Sevilla. “*Tener la capitalidad de la región a cien kilómetros (...) -recoge el texto- podría cambiar la suerte y hasta la historia de nuestra ciudad*”. Sin embargo,



el ponente no cree que exista un sentimiento “*de nacionalidad*” y, en la medida que desea una “*unidad sin destruir la variedad*” como sucede en los Estados Unidos, desde su condición de socialista, apuesta por una confederación republicana de las nacionalidades ibéricas. En atención a ello, Andalucía necesitaría un Estatuto articulado a partir de una mancomunidad de diputaciones votada en análoga proporción a la habitual, con funciones legislativas y de inspección sobre los actos de Gobierno. Semejante -sugiere- a la antigua catalana en cuanto a la existencia de Presidente, Consejo Permanente y Asamblea legislativa y, entre otras, con facultades para realizar una reforma agraria o alterar el término municipal sanluqueño en atención a la proporcionalidad de sus habitantes y la posibilidades alrededor de la producción de manzanilla.

En cualquier caso, la anécdota pasa por el hecho de que dentro del citado expediente se encuentran añadidas varias páginas en lo que se dice es un intento tras “*sencillos cambios de nombres y unos breves cortes y reducidas adiciones*”, por adaptar el texto catalán a la realidad andaluza. Iniciativa fechada en noviembre de 1932 de la que apunta es, “*personal y exclusiva*” de Mariano López Muñoz, representante del Puerto de Santa María en el inminente foro regional y autonomista convencido desde su pertenencia anterior al Centro Andaluz de Sevilla. Un intento más por dinamizar el debate. Entre los días 29 y 31 de enero de 1933, la Asamblea Regional Andaluza acoge a más de 300 asistentes a las que sumar decenas de adhesiones y delegaciones. Desde Cádiz, además de los delegados citados, participan representaciones de Diputación, Grazalema, Jerez, El Puerto, San Roque, así como del Partido Radical Socialista y de la Junta Liberalista junto a la presencia del diputado Adolfo Chacón Mata. Nos constan a la par adhesiones desde Alcalá de los Gazules, Arcos, Benaocaz, Chipiona, Chiclana, Conil, La Linea, Trebujena y Ubrique.

Tras intensos debates sobre la oportunidad y la representatividad de los reunidos, que provocaron el abandono de algunos presentes y el intento de desprestigiar



la cita en prensa, el hito de la Asamblea Regional representará la redacción de un nuevo texto estatutario: *Anteproyecto de Bases para el Estatuto*, a partir de la enmienda a la totalidad presentada por el Ateneo de Sevilla, y una vez había sido hecha suya por la asamblea preparatoria de dicha provincia. El nuevo texto rechaza la propuesta mancomunada que hace de las diputaciones elementos centrales del autogobierno en beneficio de una percepción más municipalista, singular y reformista.

De la cita andaluza darían cuenta los delegados sanluqueños al Pleno (24 febrero) con cierto retraso -se alega- por mor de la enfermedad del Alcalde. Díez Cuevas realiza una breve versión personal dando por supuestos los acuerdos de la Asamblea al haber ocupado en la prensa grandes informaciones. Asegura que el foro no ha fracasado en el propósito de buscar autonomía ya que todos estuvieron conformes con ella. Tanto, como respecto a la necesidad de una mayor autonomía municipal. Lo aprobado apunta que son principios generales que deben servir de propaganda.

Sin embargo, los buenos augurios fueron truncados en la medida que el signo político de la República se tiñe conservador durante el llamado *bienio negro ó rectificador*, y se suspenden todas las iniciativas autonomistas en marcha. Sólo desde posiciones andalucistas se prosigue en solitario con la tarea divulgadora del texto de Córdoba y con el esfuerzo de concienciación. A la llegada del Frente Popular los procesos se retoman y de nuevo a iniciativa de la Junta Liberalista, la Diputación Sevillana convoca una cita regional a la que se invita a los municipios cabeza de partido judicial y los diputados. El logro de la autonomía consigue vencer las suspicacias de la izquierda tradicional y se vincula ahora a la propia supervivencia de la República. El 5 de julio de 1936, la sede de la entidad provincial hispalense acoge una reunión donde se acuerda retomar el texto aprobado en la Asamblea Regional para lo que se confirma una *Junta Regional proautonómica* de cual se hace Presidente de Honor a Blas Infante. Trece días después, el golpe de estado militar cercenó un proyecto que contemplaba para después del verano convocar un nuevo encuentro regional

A día de hoy, carecemos de datos locales para los últimos años de República. No obstante, en aras de ese devenir permanente que marcan los años, es necesario señalar que Andalucía recuperó durante su particular Transición aquello que la Historia le negó violenta e inconstitucionalmente en 1936. Hoy, tanto nuestra democracia como nuestra autonomía, con todas sus limitaciones, nos permiten evidenciar con espíritu cívico gran parte de las diferencias que nos alejan de tiempos no tan lejanos. Y mientras apreciamos cómo han cambiado los tiempos, recordar también la adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar el 16 de julio de 1979 al procedimiento autonómico por la vía del artículo 151 de la Constitución. Ahora, que



parece justificarse todo tras los recortes de una crisis que nos han provocado, es importante defender nuestra autonomía como uno de los mayores logros históricos de nuestra tierra.

Bibliografía recomendada:

* **DIAZ ARRIAZA, J. y RUIZ ROMERO, M.**, *El proceso autonómico de Andalucía durante la II República*, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1991.

* **HIJANO DEL RIO, M. y RUIZ ROMERO, M.**, *El Ideal Andaluz en la II República. La Asamblea Regional Andaluza de 1933*, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1995.

- "Cádiz y el intento autonomista andaluz durante la Segunda República", en *Trocajero*, (10-11), 1998-1999, pp. 145-160.

* **HIJANO DEL RÍO, M., PONCE ALBERCA, J. y RUIZ ROMERO, M.**, "Frente Popular y recuperación del impulso autonómico", en *Actas del VII Congreso sobre el Andalucismo Histórico*, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1996, pp. 313-327.

* **INIESTA COULLAUT-VALERA, E.**, *Infante: Toda su verdad* (Vol. I, Sevilla, Comares-Consejería de Relaciones con el Parlamento, 2000); (Vol. II, Granada, Atrio s.l., 2003), (Vol. III, Almuzara, 2007).

* **LACOMBA ABELLÁN, JOSE, A.**, *Regionalismo y autonomía en la Andalucía contemporánea (1835-1936)*, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Granada, 1988.

Un compendio general de esta corriente histórica en:

* **RUIZ ROMERO, M.**, *Repertorio bibliográfico sobre el Andalucismo Histórico*, Fundación Centro de Estudios Andaluces, (Factoría de Ideas), Consejería de Presidencia, 2007, pp. 48. Disponible: <http://www.centrodeestudiosandaluces.es/investigación/factoriadeideas>.



José Tirado Franco, “el cura contra el maestro sanluqueño”

Foto y textos del libro
Memoria rota. República, Guerra Civil y represión en Rota,
por Mercedes Rodríguez y Pedro Pablo Santamaría.

Natural de Sanlúcar de Barrameda, José Tirado ocupa plaza de maestro en Rota en la Escuela número 3 de niños, situada en la calle Pablo Iglesias número 47 (actual calle Veracruz). Hijo de José y Dolores, se le recuerda en Rota por su compromiso con la República tal y como lo demuestran sus numerosos escritos presentados a la Alcaldía republicana solicitando las mejoras pertinentes de las condiciones laborales para la práctica educativa. Muy comentado en aquella época en la localidad fue su decisión de quitar el crucifijo del aula, demostrando además una amplia visión de futuro y un compromiso permanente con una educación de calidad.

Muestra de todo ello es el siguiente documento firmado por el maestro sanluqueño José Tirado Franco, que atestigua su apuesta por la mejora de la educación y de las pésimas condiciones laborales de los docentes, se trata de un texto mecanografiado en tres folios escrito el 12 de marzo de 1936 (pocos meses antes de su muerte



a manos falangistas) y que, analizado ahora con el paso del tiempo, se nos muestra en su parte final como una trágica premonición de lo que iba a ocurrir:

“A la comisión de Régimen Interior del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta Villa. Sección Instrucción Pública.

[...] Debo hacer presente que con fecha 30 de octubre de 1933 elevé a ese Ilmo. Ayuntamiento una instancia denunciando las pésimas condiciones higiénicas y pedagógicas del edificio (escuela) cuyo fondo principal transcribo:

En el piso bajo de la casa hay una CUADRA que con sus emanaciones pútridas y pestilentes impurifican el ambiente donde se desarrolla la labor escolar. Esta dependencia desarrolla además una verdadera plaga de MOSCAS las que invaden el antedicho local escolar estando en continuo peligro la salud de los escolares.



Encontrándose enclavada en las proximidades de la playa una fábrica de conservas cuyos desperdicios son arrojados a la misma, los cuales revueltos con la CEBA al entrar en putrefacción provocan un hedor nauseabundo que aumenta las pésimas condiciones higiénicas de dicho local. [...]

El local-escuela carece de retrete teniendo que evacuar los niños en el del Maestro que no está dispuesto a consentirlo por encontrarse enclavado en la misma cocina. [...]

La casa ha sido convertida en casa de vecindad sin el consentimiento necesario y en extremo perjudicial para la enseñanza, dando prueba de ello el que por haberse declarado un caso de sarampión fue clausurada la escuela con notorio perjuicio de la enseñanza. [...]

Portodo lo anteriormente expuesto ruego a esa digna comisión acuerde el cumplimiento de lo ya acordado [...] haciendo las oportunas gestiones con la intensidad que el caso requiere, a la que prestaremos nuestra colaboración en bien a esta futura generación de hombres del mañana, alejándoles de los peligros que en la actualidad les rodea y que puede llegar un día que sufran las consecuencias de los que con ellos conviven y les acechan”.

Toda la documentación de que se dispone sobre los últimos días del maestro antes de ser asesinado deja numerosas lagunas, sospechosamente silenciadas, que, gracias a los testimonios orales de vecinos roteños, podemos reconstruir. La cascada de acontecimientos que José Tirado Franco vivió en sus últimos días pudo ser como sigue: el 20 de julio de 1936, siendo periodo de vacaciones para los docentes, José se encontraba en Rota casualmente con el objetivo de solucionar unos asuntos administrativos, aquí fue apresado y encarcelado por los falangistas, para posteriormente ser puesto en libertad (hasta aquí todo coincide con la versión oficial de los hechos). Con el susto aún en el cuerpo, ya que sabemos como hemos visto en su escrito anterior que sospechaba que los acontecimientos políticos iban a tener en el país un trágico final, el maestro se dirigió a su pueblo, Sanlúcar de Barrameda, y allí estuvo, quizás escondido en casa de sus padres.

A raíz de aquí nada se sabe a partir de la documentación encontrada, pero son los testimonios orales los que nos permiten saber qué ocurrió: conociéndose en Rota que José Tirado estaba en Sanlúcar, salieron dos falangistas en un taxi en su búsqueda, encontrándolo posteriormente y apresándolo de nuevo. Por el camino hacia Rota tras bajarlo del taxi fue apuñalado por la espalda por estos defensores del régimen que hicieron desaparecer su cuerpo arrojándolo al río en El Puerto de Santa María. Un año después de ser asesinado, y en plena guerra, el párroco de la villa de forma cruel y demagógica responsabiliza de la situación al desaparecido maestro en los siguientes términos:

“¿Qué os crefáis, que siempre iba a ser lo mismo? ¿No gritabais tanto, no se paraban los hombres a la puerta de la iglesia, para saber quién entraba en misa? ¿Y ahora? Ahora



todos sois muy religiosos, todos sois muy humildes. Los más culpables e impíos, ya han dado cuenta a Dios de sus actos; ya estarán purgando sus culpas, de haber infiltrado en el pueblo el veneno del marxismo, alejándole de Dios. [...]

Y las mujeres que antes no venían, allí las tenéis, todas muy devotas. A mí no me engañáis. A todos os conozco muy bien. Os hago una advertencia. Los domingos, todos, todos a misa; no admito disculpas. La que tenga chicos pequeños que los deje encerrados; el que tenga un enfermo, que lo deje solo. En media hora nadie va a morir. [...]

¿Y los niños? ¿Qué os diré de los niños? Los hay que no saben ni santiguarse, por el otro maestro, impío y masón, que no paga con la muerte que ha sufrido el crimen de no enseñar el catecismo a los angelitos de Dios. Todos tienen que venir a la doctrina y estudiar sobre todo el catecismo que el nuevo maestro les enseña³.

Lo dicho: "El cura contra el maestro"⁴.

3 Fragmento recogido en Antonio Bahamonde, Un año con Queipo de Llano (Memorias de un nacionalista), Sevilla, 2005.

4 Expresión utilizada por algunos historiadores para explicar la lucha ideológica entre la Dictadura y la República

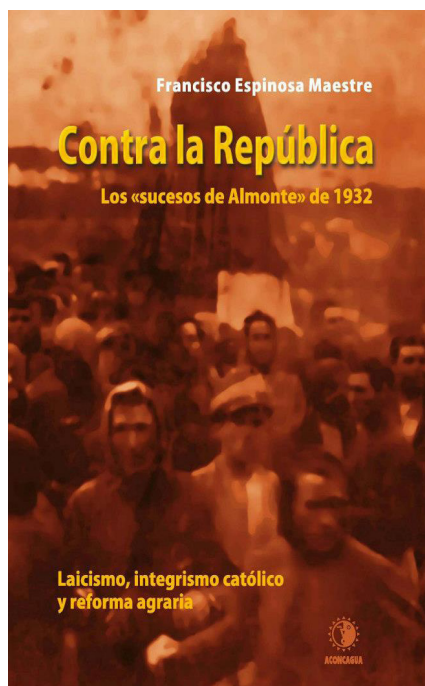


Contra la República. Los 'sucesos de Almonte' en 1932

Francisco Espinosa Maestre
Aconcagua Libros
2012
ISBN 978-84-96178-90-8

Santiago Moreno Tello

No es la primera vez que Espinosa Maestre dedica su tiempo a estudiar el ámbito cercano a la



festividad religiosa del Rocío. Ya en 2009 en su 'Callar al mensajero' (Ediciones Península) tributó un capítulo a la historia del director de cine Fernando Ruiz Vergara, su documental 'Rocío' y los oscuros episodios jurídicos con la familia del alcalde, en tiempos de Primo de Rivera, José María Reales. No en vano, según explica el autor en la introducción, llevaba años recopilando información sobre este tema que no es sino una ramificación más de aquella magnífica obra magna titulada 'La guerra civil en Huelva' (Diputación de Huelva, 1996).

El nuevo libro, editado por Aconcagua, puede parecer de un localismo extremo. De hecho se centra en el municipio de Almonte y su aldea de El Rocío. Sin embargo la trascendencia que desde hace algunas décadas ha tomado la romería que en ella se celebra hace que el estudio que se nos presenta tenga un máximo interés.

Además, aunque nos estemos centrando en un hecho —en principio— puntual, no quiere decir que en su momento no tuviera repercusión de ámbito nacional.

Francisco Espinosa nos desglosa en primer lugar, con la maestría a la que ya nos tiene habituados, el contexto. Con un término municipal de los más grandes de España, Almonte con las desamortizaciones del siglo XIX llegó a perder grandes cantidades de tierra a favor de manos privadas: por ejemplo el Coto de Doñana. Hecho notorio y dañino para la mayoría de la población más cuando muchas de esas tierras, en un principio, eran propiedades del común, es decir, tierras, por ejemplo, que aquellos que no tenían nada obtenían de las mismas lo mínimo para subsistir.



La República instaurada en 1931 apoyará a los municipios del país para que intenten recuperar aquellas tierras del común. Que pasen a manos municipales así como para el disfrute de los ciudadanos. Para luchar contra este supuesto atropello –o al menos así ellos lo veían-, la derecha integrista y terrateniente almonteña aprovechará otro tipo de reformas republicanas para llevar a cabo sus planes en contra de aquellos que estaban haciendo cumplir las leyes. Las políticas laicistas serán usadas por la oligarquía de Almonte como excusa para atentar contra el nuevo régimen establecido. Y ahí se encuadra el episodio de los sucesos de Almonte. Cuando el ayuntamiento republicano, elegido democráticamente por los vecinos, decide quitar el azulejo de la Virgen del Rocío que hay en el interior del consistorio, irrumpirá en la localidad onubense un motín contra la República y sus representantes: serán asaltadas las casas del alcalde y los concejales, el cura será llevado a hombros hasta el balcón municipal y se sacará de manera extraoficial a la Virgen del Rocío en procesión. Esto conllevará a Almonte a unos meses de inestabilidad achacados a las políticas anticlericales de la República. Cuando lo que subyace en el fondo, como nos dice Espinosa Maestre, son las políticas de Reforma Agraria que intentan establecerse en el país.

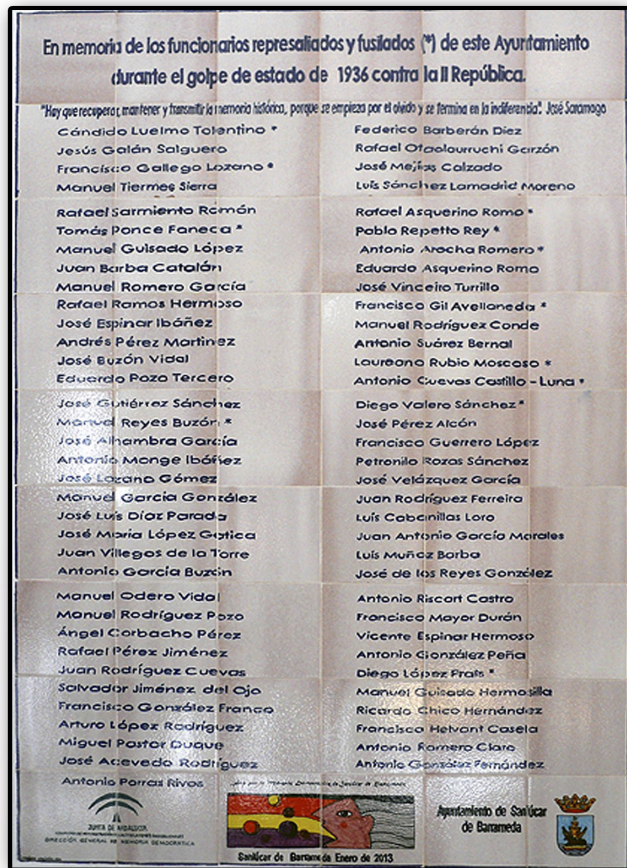
Pero para poder llegar a esta y otras conclusiones ha habido que desenmascarar la versión oficial fomentada por el franquismo que no era otra sino la dada aquel mismo año de 1932 por el periódico Carlista ‘La Unión’. Oralidad y nuevos documentos encontrados como el procedimiento abierto por el Gobierno Civil tras la lectura del manuscrito del alcalde Francisco Villarandando su visión de los hechos, colman las páginas de la nueva obra de Espinosa Maestre.

Los capítulos finales encierran además la llamada ‘venganza final’, es decir, como los golpistas del 18 de julio de 1936 retomarán el episodio de los sucesos para hacer desaparecer a todos los almonteños vinculados con los intentos de reforma en el municipio. Destacamos el capítulo dedicado al testimonio que nos dejó por escrito María de los Santos Rivero y que Espinosa pone en conocimiento de todos gracias a Rafael López, presidente de AMHyJA.

‘Contra la República’ culmina con una serie de anexos que vienen a cerrar un nuevo capítulo de nuestra historia más reciente. Nos vuelve a sorprender, pues, el historiador Francisco Espinosa con una nueva publicación. Necesaria para entender nuestro pasado más reciente así como llegar a comprender nuestra realidad más cercana.

SUMARIO:

Prólogo.....	pág. 3
Emotivo homenaje a los represaliados del Franquismo.....	pág. 5
Los Romero Pazo: Una familia de luchadores.....	pág. 6
Rafael García: un anarquista sanluqueño.....	pág. 11
Resistencia y represión en Trebujena: El tiroteo con la Guardia Civil en la carretera de Sanlúcar.....	pág. 21
Sanlúcar de Barrameda ante los antecedentes proautonómicos de Andalucía	pág.27
José Tirado Franco, “el cura contra el maestro sanluqueño”.....	pág. 34
Contra la República. Los “sucesos de Almonte” en 1932.....	pág. 36



NOS QUEDA LA PALABRA

El pasado no pasa nunca,
el pasado es el presente.
La voz que quisieron enterrar
vuelve hoy a esta pared
para que los sesenta y nueve nombres
no se borren de la historia.
La voz que quisieron silenciar
no se ha apagado en la garganta
de sus nietos.
La voz que quisieron acallar
vuelve con el viento
gritando la verdad.
Olvidaron, que esa voz
que quisieron enterrar,
que esa voz que quisieron silenciar,
que esa voz que quisieron acallar,
anida en nuestra memoria
buscando la empatía
con el dolor injustamente contenido.
Olvidaron, que aún, nos queda la palabra.

Ifigenia Bueno Bordell

(Inauguración azulejo memoria funcionarios represaliados y fusilados por defender la legalidad republicana) Enero 2013



FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
ABRIL 2013